

PAULO RENATO DA SILVA, MARIO AYALA
FABRICIO PEREIRA DA SILVA , FERNANDO JOSÉ MARTINS
(COMPILADORES)

**LUTAS, EXPERIÊNCIAS E DEBATES
NA AMÉRICA LATINA**

**Anais das IV Jornadas Internacionais de Proble-
mas Latino-Americanos**

**Foz do Iguaçu
Imago Mundi / PPG - IELA UNILA
2015**

No violencia estratégica y su aplicación en Paraguay: desestabilización y des-ciudadanización

Facundo Bordachar y Andrés Bustos

FSOC – UBA

af.bustos@gmail.com

Resumen: Nuestro trabajo de investigación propone como eje central analizar el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay en junio del 2012. Queremos indagar de qué manera se montó la destitución presidencial y cómo se fue desarrollando un plan que tenía como objetivo inmediato, esa es nuestra hipótesis preliminar, abortar ciertas condiciones favorables para el posicionamiento de organizaciones populares y campesinas como alternativa electoral. A su vez, es nuestra intención hacer foco en las consecuencias de estos hechos en materia de derechos humanos y de deconstrucción de ciudadanía.

Introducción

A lo largo de la joven historia de las naciones latinoamericanas han tenido lugar diferentes experiencias desestabilizadoras que, oponiéndose a la voluntad popular, dieron fin de manera abrupta a ciertos gobiernos e impusieron nuevas reglas de juego.

Si observamos los actores que hicieron de la aplicación de dicha metodología una práctica recurrente en la política de nuestra región, por lo general encontraremos una fórmula repetida: se trata de grupos de poder locales alineados con grandes intereses de países capitalistas centrales que, respaldados por ellos a nivel internacional, buscan recuperar el control gubernamental en alianza con sectores oligárquicos.

En este recorrido intentaremos, a partir de un análisis sobre cómo se construyó el clima social que posibilitó el golpe de estado perpetuado contra Fernando Lugo en Paraguay el 22 de junio de 2012, analizar los cambios en las prácticas desestabilizadoras a las que se apela en el siglo XXI: la puesta en marcha de golpes “blandos”, así llamados para contraponerlos a las modalidades golpistas del siglo anterior.

Los intereses imperiales detrás de dichas iniciativas se ligan con la dirección que tomaron en la última década los procesos políticos y sociales de América Latina y el Caribe, la cual no resulta satisfactoria para Estados Unidos. El rechazo a constituir una zona de libre comercio en toda América -ALCA-, la resolución exitosa de varios conflictos regionales a través de una institucionalidad

en construcción que excluye a Washington de sus decisiones, el mayor grado de intercambio con otras regiones y potencias (como China y Asia en general, Rusia, etc.), están en la dirección contraria de lo que pretende Estados Unidos para la zona. Por ende, la diplomacia norteamericana ve positivamente deshacerse de estos gobiernos que no favorecen al tipo de desarrollo democrático representativo neoliberal por ellos pretendido. (Aronskind, 2012: 123)

En este marco, coincidimos con Rocco Carbone, en aseverar que el juicio político a Fernando Lugo reactualiza fantasmas como los del stronismo o como los de las dictaduras institucionales del Cono Sur. Reactualiza el golpe de Estado propiciado en 2002 en la República Bolivariana de Venezuela contra Hugo Chávez y varios intentos desestabilizadores contra Evo Morales, sin olvidar la crisis política generada en Ecuador en 2010. Sobre todo, el golpe en Paraguay resignifica el acontecido en Honduras en 2009 contra Manuel Zelaya. Los ingredientes comunes en todos ellos: la vieja tradición, la oligarquía mediática, el empresariado local, las fortunas familiares, los medios de comunicación, la iglesia. (Carbone, 2012: 69). ¿Quiénes lo promueven? Una alianza concreta entre intereses norteamericanos y la derecha reaccionaria desplazada de su histórico papel protagónico en la vida política nacional.

Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Todos estos países atravesaron intentos destituyentes de diferente magnitud, observándose similares argumentos legales esgrimidos por los golpistas. En Paraguay se dio una violación de la voluntad popular y, al igual que en Honduras, fue adoptado un intento de maquillaje parlamentario que apeló a fundamentos legales aunque de claro carácter inconstitucional.

El golpe de Honduras ya había sido leído como una prueba de laboratorio para desarrollar ciertas estrategias. Quebró un contexto ocupado por El Salvador del Frente Farabundo Martí y la Nicaragua del Frente Sandinista, y una cercanía al ALBA (Alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América) que no suponía un mero tratado comercial sino una propuesta mayor de integración, colaboración y complementación contraria a los intereses de Washington. A Manuel Zelaya, el presidente depuesto, lo acusaron de generar “desviaciones institucionales”.

Por su parte, según José Carlos Rodríguez, el gobierno de Lugo era sudamericanista – apostando por el fortalecimiento de la Unasur y del Mercosur – mientras que la mayoría del parlamento era norteamericanista. El golpe fue anti Mercosur, anti Venezuela (Rodríguez, 2012: 53). Fue también una muestra de las nuevas formas de actuar de los grupos destituyentes, apoyados por el imperio norteamericano. Ya no se da en la manera de las dictaduras clásicas. El neo golpismo ya no necesita a las fuerzas armadas (Carbone, 2012: 68).

Nuestro punto de partida será entonces, analizar el caso del juicio político a Lugo como un ejemplo de puesta en práctica de nuevas estrategias desestabilizadoras. A su vez, rastreamos el rol jugado por ciertos actores económicos en dicho proceso, a través del análisis de uno de los medios de comunicación más importantes de Paraguay y ejemplo claro de los grandes grupos empresariales y mediáticos, como es el diario ABC Color.

De las intervenciones militares a los golpes “blandos”. Los cambios estratégicos.

Las nuevas formas destituyentes, los denominados golpes “blandos”, surgen de la habilidad de ingeniería desarrollada a escala planetaria por un imperio acosado por la crisis económica. Anteriormente, las estrategias diferían en cuanto a su forma, más allá de que el contenido y los objetivos fueran similares.

Se recupera entonces cierta tradición golpista de los años sesenta, cuando las fuerzas armadas de América Latina y el Caribe protagonizan una revolución conservadora que les asigna un protagonismo excepcional en la vida política, participando de lleno en la denominada modernización económica y social (Roitman Rosenmann, 2013: 138). Cuando los bordes nacionales operaban de manera insuficiente para interpretar el mundo contemporáneo, ya que excluían un ámbito cada día más relacionado con el mundo exterior: la cultura nacional, la verdadera frontera era la interior. Esta frontera era la que debía ser preservada, perfeccionada y desarrollada. En ese juego entraban las Fuerzas Armadas como actores locales de cambio y transformación.

Paraguay, que históricamente había sido desestimado por los Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX pasó rápidamente a ser considerado como un punto clave de alerta contra el comunismo en la región, por su ubicación geopolítica. En 1958 el embajador estadounidense en Asunción señalaba la idea del país norteamericano en instalar una nación fuertemente anticomunista en medio de países que experimentan graves problemas económicos internos e inviabilidad política. Factores que se consideraban favorables a la penetración comunista. (Soler, 2012a: 93)

Las alianzas cívico-militares, entonces, eran la palanca para la transformación social. Se trataba de alianzas anticomunistas de desarticulación de las izquierdas. (Roitman Rosenmann, 2013: 140)

Hoy esas alianzas se mantienen pero las fuerzas armadas se han retirado. En procesos donde las políticas neoliberales fueron reemplazadas, las burguesías gerenciales que están siendo desplazadas del poder, continúan aliadas al imperialismo norteamericano y a las democracias europeas, buscando revertir su condición apoyando procesos desestabilizadores.

Se busca revertir el cambio en el poder político, modificar la correlación de fuerzas que limitan a las oligarquías y las burguesías gerenciales de los centros de poder y control.

La estrategia de guerras de baja intensidad es la que pondera en los países latinoamericanos. La misma ya tuvo éxito en Honduras y Paraguay, potenciando sendos golpes de Estado, definidos como constitucionales, de guante blanco o golpes “blandos”.

Mecanismos destituyentes. La no-violencia como método para desestabilizar gobiernos.

Si tomamos los postulados teóricos de la no-violencia como punto de partida para el análisis de las nuevas estrategias golpistas en la región, podemos encontrar en el caso paraguayo su aplicación concreta.

Gene Sharp compila una serie de pasos para lograr la derrota de un gobierno por parte de la sociedad civil. Haciendo propia la teoría del “fin de la historia”, esta metodología iguala “totalitarismos” de izquierda y de derecha, ya que propone el uso de la lucha no-violenta tanto contra regímenes *nazis* como *comunistas*. (Sharp 1988, p. 37).

La premisa es sencilla: se trata de quitarle el poder al gobierno y distribuirlo. A partir de que los gobernados retiren su consentimiento al gobernante, pueden controlar su poder y hasta destruirlo.

Sharp omite tanto las diferencias de clase como las realidades sociales, económicas y políticas existentes al interior de cada sociedad, limitándose a razonar en términos de gobernantes y gobernados. Si estos últimos sostienen, en un número considerable y por un tiempo suficientemente largo su resistencia, el gobierno perderá el poder.

La confrontación propuesta es de tipo indirecta y apunta a *voltear* el apoyo que detenta el gobierno, atacando sus fuentes de poder, subvirtiendo su posibilidad de aplicación y debilitando su voluntad de uso (Sharp 1988, p. 63).

Lo que se busca entonces es destituir a los productores del orden social. Modificar la dirección que tomaron los procesos constituyentes nacidos de la crisis neoliberal, como el que se venía dando en Paraguay, hasta su abrupto final en junio del 2012.

Los casi doscientos métodos propuestos por el autor apuntan, teóricamente, a la organización para la lucha de los ciudadanos frente al poder opresor. En términos concretos, y de acuerdo a lo expuesto por Walter Goobar y Eduardo Vior (2014), estas técnicas han servido para llevar a cabo derrocamientos -exitosos o no- en países tan disímiles como Venezuela, Siria, la ex Yugoslavia, Ucrania y Egipto.

Si nos concentramos en el derrocamiento de Fernando Lugo podemos observar lo siguiente: un vasto conjunto de actores políticos y económicos que por primera vez en la historia paraguaya pierden la exclusividad simbólica de la toma de decisiones y dejan de reconocerse en la administración del estado (Rodríguez, 2012: 55), encabezan una estrategia no violenta para recuperar el

poder. Los “gobernados” buscan desplazar a los “gobernantes”. A la cabeza del ataque, los monopolios empresariales-mediáticos, que desde el mismo día en que se produjo la masacre de Curuguaty reclaman el enjuiciamiento político del presidente.

En Paraguay la trama desestabilizadora triunfó responsabilizando a Lugo de las muertes ocurridas el 16 de junio de 2012 en la masacre de Curuguaty. El poder judicial y el congreso en manos de la derecha reaccionaria justificaron la destitución y el juicio *express*. Más allá de que el gobierno del ex obispo apenas pudo alentar ciertos frenos ante los intereses de las multinacionales y de las tradicionales estructuras de poder, la reacción opositora fue feroz. En la desestabilización intervinieron empresas transnacionales, lobbies de presión, representantes del departamento de estado norteamericano y grupos de poder local. A los ojos del pensamiento de Sharp, todos ellos son parte del primer término de la fórmula “gobernados que buscan liberarse del gobierno opresor”.

Alianzas y conexiones del poder: los intereses del agronegocio y los grandes medios de comunicación.

El agronegocio ayer, hoy y ¿siempre?

Como ya mencionamos, los nuevos gobiernos latinoamericanos significaron un desplazamiento del poder político de ciertos actores tradicionales, cuya búsqueda permanente fue lograr recomponer el status quo anterior. En Paraguay, a su vez, los sectores económicos y políticos que propiciaron, apoyaron y ejecutaron el golpe de Estado destituyendo al presidente Lugo, buscaban otro objetivo: la conservación del modelo económico vigente desde hace décadas en el Paraguay, y por ende, de los privilegios y las ganancias que el mismo genera para un sector minoritario de la sociedad (Rojas Villagra, 2014: 34).

Dicho modelo se centra en la explotación agrícola de carácter extractivista, una de las principales actividades económicas y fuente de divisas de toda América Latina. Vigente desde el siglo XIX y con un notable impulso tras el desmantelamiento de los diferentes procesos industriales sustituitivos, el agro es en la actualidad el sector productivo de mayor dinamismo de la región.

A partir de la crisis financiera mundial ocurrida durante 2008 se generó un mayor movimiento de capitales hacia el sector de los agronegocios y la compra de tierras. Así, la matriz extractiva está siendo profundizada en toda América Latina, como estrategia del capital global para dar salida a dicha crisis. Esto trae aparejado un costo gigantesco para los pueblos que habitan esas regiones, que van siendo desplazados para dar paso a la producción intensiva de la tierra. También genera daños irreparables en los ya deteriorados ecosistemas.

La expansión del agronegocio en Paraguay, forma parte del modelo extractivo impulsado por grandes empresas transnacionales que dominan sectores clave de la producción y monopolizan las tecnologías utilizadas en estos procesos. La semilla más utilizada en este proceso de expansión territorial ha sido la soja RR de la empresa multinacional Monsanto. La soja se convirtió en el rubro estrella de la “modernización agrícola” del país: mientras en el año 1995 se habían sembrado 833.000 hectáreas de esta oleaginosa, diez años después, en 2005 se llegó a 2.000.000 de hectáreas y en 2012, se llegó a 3.157.600 has. (Rojas, 2014. p 10)

Los datos del Censo Agrícola Nacional del Paraguay en el año 2008 arrojan que el 2,5 % de las fincas posee el 85 % de las tierras censadas, confirmando que el modelo productivo, por ser intensivo en inversión de capital y en la explotación de la tierra, va profundizando una mayor concentración de la misma, ocasionando la progresiva desaparición de las pequeñas fincas rurales, mayoritariamente campesinas (Rojas, 2014: 15).

Además, las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales. (Méndez Grimaldi, 2012: 3).

La injusticia tributaria se ve agravada con las devoluciones que realiza el Ministerio de Hacienda a las empresas agroexportadoras en concepto de IVA por actividades de exportación. Esta devolución se basa en la Ley N° 125/91, artículo 84, que establece que las exportaciones están exoneradas de impuestos (Rojas, 2014: 41).

Medios de comunicación y grupos económicos: ABC Color

La legitimidad y la aceptación de la maniobra desestabilizadora la terminan de moldear los medios de comunicación, lo que los convierte en actores clave de la estrategia no violenta. Diego Segovia plantea que en un contexto global de capitalismo neoliberal, la conexión entre los grupos empresariales que controlan los medios masivos de comunicación y aquellos que controlan el núcleo duro del capitalismo financiero es cada vez más intensa y cercana. A su vez, la política pasa a ser política de mercado, cada candidato es un empresario que necesita vender un producto, su imagen, al costo de un voto (Segovia, 2010: 17, 20).

En la actualidad paraguaya podemos encontrar siete grandes grupos empresariales que controlan los medios más importantes: Zuccolillo (diarios ABC Color y Vanguardia), Domínguez Dibb (diarios La Nación y Crónica, radios 970 AM y Montecarlo FM), Vierci (diario Última Hora, radios

Estación 40, Urbana y Monumental AM, canales 4 y 11 de televisión), Wasmosy (diario Popular, radios Uno y Popular FM), Chena (radios Cardinal AM y FM, Canal 13 de televisión), Ángel González (canales 9 y 5 de televisión) y Rubín (radios Ñandutí AM y FM, Rock and Pop, Mburukuja PJC, RGS, Disney, Farra y otras). Todos ellos mantienen inversiones en otros campos de la economía nacional. (Segovia, 2010: 35, 43).

El grupo Zucolillo es uno de los actores más ricos de Paraguay. Su diario ABC Color es el diario de mayor circulación del país. Sus negocios incluyen inmobiliarias, bancos, constructoras, centros comerciales y participación en compañías de telefonía celular y automotrices, además de poseer decenas de miles de hectáreas, fruto de sus contactos durante el régimen stronista.

Si se piensa en la estructura económica de Paraguay en términos de “tipos ideales” weberianos, encontramos cuatro grandes grupos: terratenientes tradicionales, empresas transnacionales y sus aliados locales, mafias (narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero) y empresarios políticos corruptos. El grupo Zucolillo posee conexiones e intereses comunes con casi todos estos grupos y logra establecer vínculos estratégicos con ellos (Segovia, 2010: 57).

ABC Color actúa como vocero de las distintas organizaciones de la oligarquía (Unión de Gremios de la Producción – UGP; Asociación Rural del Paraguay – ARP; Coordinadora Agrícola del Paraguay – CAP, Asociación de Productores de Soja – APS; entre otros), ampliando su capacidad de lobby y presión. A modo de ejemplo de la estrecha vinculación existente, cabe mencionar que en 2012, Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, era integrante del staff directivo de varias empresas del Grupo Zucolillo (Méndez Grimaldi, 2012: 3).

El 8 de junio de 2012, unos días antes de la masacre de Curuguaty, se publicó en ABC Color una nota titulada “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” y firmada por la UGP. La misma fue parte de una campaña mediática destinada a remover de su cargo a quien fuera en ese entonces presidente del SENAVE (Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), debido a su negativa a inscribir una semilla transgénica fabricada por Monsanto en los registros de cultivables, ya que esta carecía de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, exigidos por la legislación vigente. Se evidencia como una empresa trasnacional, un sector importante de productores agrarios y un medio de comunicación masivo, operan a favor de los mismos intereses ligados directamente al agronegocio.

A su vez, el grupo Zucolillo es socio en Paraguay de Cargill, otra de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. Esta empresa construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, en una propiedad del grupo. Dicha obra se

llevó a cabo sin ninguna restricción, pese a las denuncias realizadas por contaminación ambiental, debido a que la misma se encuentra emplazada a 500 metros de la toma de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP), sobre el río Paraguay. ABC Color se ocupó de defender la construcción.

Ya desde 2007 instalaban la idea de que el puerto sería positivo para la comunidad, como puede verse en una nota del 2 de Octubre, titulada “Vecinos apoyan el puerto Unión de Cargill”:

Organizaciones representantes de los pobladores de Viñas Cue, Zeballos Cue y Las Colinas, así como de la Asociación de Pescadores de Zeballos Cue están a favor de la instalación del puerto Unión, de la multinacional Cargill, en la ribera del río Paraguay, zona de Zeballos Cue, cerca de los puertos Caacupemí y Fénix.

Y en 2010 daban lugar a la empresa para desplegar argumentos que defendían su posición en esta publicación del 26 de septiembre:

Directivos de la empresa Puerto Unión SA (PUSA) señalaron que la barrera de contención instalada por la firma en las inmediaciones de la toma de agua de la Essap ha sido clave para evitar la contaminación por derrame de combustible del agua succionada en dicha toma. También contribuyó la efectividad de este sistema, los trabajos de mantenimiento habituales que se encontraban realizando en esos momentos el personal de PUSA. Puerto Unión, conformado por Cargill y la empresa local Puerto Zeballos SA, emplazó sus instalaciones y silos para embarques de cereales, que según los directivos, estaría preparado para exportar un millón de toneladas de granos de soja al año.

El rol de los medios de comunicación como parte de la estrategia no violenta

Retomando a Sharp, éste sostiene que la apertura de la lucha no violenta es un aspecto clave: no se trata de una conspiración secreta, sino de un movimiento de liberación (Sharp, 1988: 70). Y qué mejor herramienta que los medios de comunicación para darle al golpe la masividad necesaria y el barniz democrático-republicano que permita garantizar la aceptación del nuevo gobierno.

ABC Color se presenta desde su línea editorial como garante de las instituciones democráticas y portavoz del ciudadano paraguayo, sin importar quien gobierne. En un repaso de sus Editoriales publicadas entre el 15/06/2012 (un día antes de la masacre de Curuguaty) y el 23/06/2012 (al día siguiente de la destitución de Lugo) podemos observar dicha posición. A modo de muestra, en el medio del caos político acontecido en los días siguientes a Curuguaty, el diario en su edición del 18/06/2012 rescata como ejemplo de civismo a los ciudadanos de Capiatá que, en una “marcha pacífica” que convocó 10.000 personas, salieron a las calles para conmemorar el Día de la Paz del Chaco y “exhortar a sus conciudadanos a despertarse contra la corrupción y la impunidad”.

Más allá de la marcha en sí, el diario busca ponerse del lado de aquellos ciudadanos y enfrentarse al poder estatal, llegando incluso a comparar las instituciones democráticas a las dictatoriales y llamando abiertamente a presionar al gobierno:

Si tenemos que atenernos a sus resultados, las instituciones democráticas de fachada consagradas en la Constitución nacional difieren muy poco de las que disponíamos durante la dictadura, pues ambas cuentan en común el cercenamiento del derecho básico de elegir que tienen los ciudadanos en la democracia representativa. Irónicamente, como resultado tenemos que el pueblo ha caído de la sartén al fuego al cambiar una forma de dictadura por otra semejante, excepto por la vigencia de la libertad que antes no existía. Así las cosas, los paraguayos tenemos hoy el gran desafío de acabar con esta autocracia partidista que cercena nuestros derechos ciudadanos, reduciéndonos a la vil condición de eunucos, cívica y metafóricamente hablando. La digna y altiva comunidad de Capiatá nos ha demostrado que la única estrategia eficaz de lucha contra las corruptas élites políticas de antigua y nueva extracción detentoras del poder estatal es la presión popular que las haga retroceder hasta un punto de no retorno.

El ataque no violento tiene a su favor la dificultad del gobierno para reprimirlo. Una reacción gubernamental ante las mentiras y acusaciones infundadas de los medios se vuelve en su contra al transformarse en una potencial denuncia de censura y limitación de la libertad de expresión. Así, se intenta poner a la opinión pública (local, regional, mundial) en contra del gobierno y a favor de los golpistas.

Una vez acontecida la masacre de Curuguaty, ABC responsabilizó a Lugo y pidió que sea juzgado, sin ningún tipo de disimulo ni media tinta. Su editorial del 16/06/2012 titulado “El presidente Lugo es el responsable de esta lamentable tragedia” cierra diciendo:

Por su parte, el presidente Lugo tal vez vuelva a eludir – más producto de la suerte que de cualquier otra circunstancia – la posibilidad de ser sometido a un proceso político en el Congreso que derive en su eventual remoción del cargo. Es probable que tenga esa suerte. Sin embargo, no logrará nunca salvarse del juicio perentorio de la historia, que le reserva el triste y nada digno lugar de pasar a ser considerado uno de los más incompetentes mandatarios que tuvo la República en más de doscientos años de vida independiente.

Así como también el 17/06/2012:

Si en esta oportunidad el Poder Ejecutivo no actúa enérgicamente contra los grupos criminales y violentos que mantienen en zozobra a todo el país, el Congreso debería iniciarle juicio político al Presidente de la República por mal desempeño de funciones.

El 20/06/2012 se presenta a Lugo como incapaz, y se le solicita que deje su lugar a otros para que gobiernen:

Evidentemente, este es el fondo de la cuestión: Fernando Lugo no tiene el “don de conducción”. Carece de las dotes necesarias para tomar las riendas del país y conducirlo por derroteros de pacificación, crecimiento y prosperidad. (...) El presidente Fernando Lugo debe reconocer este decepcionante panorama y actuar en consecuencia. Si no tiene las

“dotes de conducción” necesarias para liderar al Paraguay en esta grave coyuntura, debería permitir que otros encaminen al país por la senda de la reconciliación, del trabajo y del bienestar para todos y cada uno de sus habitantes.

El 21/06/2012 se le exige al presidente que se someta a juicio o renuncie:

Quien debió someterse espontánea e inmediatamente a un juicio político tuvo que haber sido el actual Presidente de la República, primer responsable de estos sucesos, como en su oportunidad lo hizo el presidente José Patricio Guggiari, cuando los hechos trágicos del 23 de octubre de 1931; o renunciar, por lo que optó el presidente Raúl Cubas, en ocasión de los luctuosos acontecimientos de marzo de 1999. Pero Lugo ni se hace investigar ni renuncia; actúa fingiendo que nada tuvo que ver y que él realmente estuvo ajeno al drama. Ni hablar, por supuesto, de que admita otras culpas, como negligencia o de ineptitud para el mando.

Y, finalmente, el 22/06/2012 anuncia que Lugo ha perdido el respaldo de sus ciudadanos, a partir de que el Partido Liberal le retirase su apoyo:

No obstante, más allá de lo que las cifras digan o puedan decir, lo cierto y lo concreto es que el Presidente de la República ha perdido el respaldo de la mayoría del pueblo paraguayo, y que en sus manos está la posibilidad de salir del poder por la puerta grande o hacerlo de manera indigna.

Queda en evidencia el objetivo del diario: dejar en claro su apoyo no solo a que se someta al presidente a juicio político, sino a que deje el poder y sea reemplazado. Sharp dice que el éxito de esta estrategia se alcanza a través de la denominada “coacción no violenta”: contra la voluntad de los adversarios (el gobierno), los activistas producen los cambios deseados. El adversario es forzado a actuar en contra de su voluntad. Sin infligir daño físico, se logra el colapso total de un sistema de gobierno, habilitando la desobediencia al orden gubernamental (Sharp, 1988: 104-105).

En el caso paraguayo la masacre de Curuguaty fue la oportunidad (creada adrede o no) inmejorable. Con aquel desencadenante del caos colectivo que los medios monopólicos intentaron perpetuar, se aprovechó la confusión y la efervescencia colectiva para manipular a la sociedad civil, generando las corrientes de opinión que legitimarían en definitiva la destitución del gobierno democrático. El adversario había sido derrotado y la sensación es que todo había sido hecho bajo el nombre de la ley.

El lugismo, por su parte, no había logrado generar un actor político que pudiera ocupar las calles así como tampoco una alianza con sectores de la burguesía. No se pudo construir un relato y una bandera propia. El peso simbólico del stronismo aun no se ha resuelto en Paraguay y sigue perpetuando una visión histórica que coloca a la Guerra de la Triple Alianza como principal portadora

de representaciones e imágenes políticas eficaces. Las mismas que le sirvieron a las elites paraguayas para continuar legitimando la destitución de Lugo ante los cuestionamientos de los países de la región reunidos en la UNASUR. (Soler, 2012a: 166-168) El relato es utilizado por los poderosos para enceguecer al pueblo paraguayo. La invocación constante de la guerra desmarca a los beneficiarios del siglo XX y XXI –vuelto invisibles- bajo la alfombra de los Estados de ayer (vuelto a-históricos). Ese marco permite la demonización del factor regional. (Halpern, 2012: 116).

Obsérvese en ese sentido, el siguiente extracto de la editorial de ABC Color del día 15/06/2012:

En lo que debe ser considerado como el más audaz y perverso exabrupto político jamás proferido en la última década, la ex secretaria general de la Unasur, María Emma Mejía, acuñó el término democracia “flexible” para justificar todos los atropellos y abusos que contra este sistema de gobierno abierto y plural viene cometiendo sistemáticamente la nueva camada de presidentes autoritarios izquierdistas que gobiernan en la región, los exponentes de ese engendro conocido como “bolivarianismo socialista del siglo XXI”, nuevo nombre para el fracasado marxismo, enemigo de la libertad y la propiedad privada. (...) El Congreso Nacional no debe dejarse engañar por las definiciones arteras de la ex-ministra colombiana, manteniéndose firme en su propósito de rechazar el perverso Protocolo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia, adoptado en noviembre de 2010, el cual, como ahora venimos a constatar, no es más que el instrumento que los nuevos dictadores de la región esgrimirán para instalarse o permanecer eternamente en el poder.

No solo ABC sugiere (u ordena) como debe actuar el poder legislativo, sino que lo hace en nombre de la defensa de la democracia paraguaya (y del capitalismo, claro).

Volviendo al juicio, las palabras constitucional y legal fueron los ejes del argumento. El derrocamiento a Lugo se dio utilizando una legalidad abstracta, profundamente ideológica pero disfrazada de imparcialidad, para de este modo escapar de la idea de Golpe de Estado.

La acción no violenta supuestamente permite obtener resultados que deberían ser más permanentes y satisfactorios que los logrados por medio de la violencia (Sharp, 1988: 109). De aquí la “resignación cristiana” con la que Lugo se “somete” a la decisión del congreso (Soler, 2012b: 26). Y el rápido retorno de todos los canales de televisión a su programación normal dejando velozmente en el pasado aquel “Golpe guionado”.

La inconstitucionalidad de un juicio sin sustentos legales ni políticos obliga a pensar en los actores y en una clase política a merced de intereses corporativos y económicos.

Lo que buscan es generar o perpetuar situaciones de caos internos que hagan viable su estrategia golpista. Los escenarios de inseguridad, desobediencias, debilidades institucionales dejan terreno permeable para obtener la legitimidad de su acción.

De este modo se busca debilitar la cohesión social utilizando al miedo como sensación dominante. Llevar a la comunidad la idea del sálvese quien pueda redimensionando una vez más la figura del enemigo interno, esta vez más difuso, incluyendo a la sociedad toda en un escenario de guerra (Roitman Rosenmann, 2013: 176).

A través de este tipo de estrategias, las nuevas derechas siguen contando con posibilidades de ascender al poder ya que cuentan con el respaldo internacional y el control de los monopolios mediáticos, herramientas esenciales para desestabilizar a los actuales gobiernos latinoamericanos que no van en la dirección que ellos desean.

Y, una vez que la metodología desestabilizadora demuestra su efectividad, se replica la receta. Cuando se usa la acción no violenta con eficacia, la técnica tenderá a extenderse (Sharp, 1988: 112).

Los resultados de la estrategia: Franco y Cartes

Durante el gobierno de Lugo el modelo económico extractivista y agroexportador no fue afectado en sus bases y estructura. Pero tampoco ese modelo lograba profundizarse y expandirse en el país a la velocidad que las transnacionales, empresarios, terratenientes y grandes productores esperaban y exigían (Rojas, 2014: 35). Había una mínima resistencia por parte del gobierno.

En el aspecto político, el regreso de los partidos tradicionales al poder determinó el freno a la posibilidad de que surgiera una alternativa política que incluyera actores hasta el momento ausentes de la política partidaria paraguaya.

Como resultados concretos y evidentes, podemos observar que ya durante el gobierno de Federico Franco se buscó facilitar una mayor diseminación del modelo extractivista, otorgando todas las facilidades y garantías para ello a los actores del agronegocio. Y en el actual gobierno de Cartes podemos observar como también algunos actores del ámbito agropecuario terminan siendo designados como funcionarios de estado: el consultor en agronegocios Jorge Gattini como Ministro de Agricultura y Ganadería, el productor de soja y expresidente de la Asociación de Productores de Soja, Regis Mereles, como presidente del SENAVE. Evidentemente la línea gubernamental será más biotecnología, más explotación de los recursos naturales y más extractivismo. (Rojas, 2014: 39-40)

Algunas medidas ejemplificadoras a la hora de observar este nuevo rumbo:

- A 15 días del cambio de gobierno, el SENAVE emitía una resolución por la cual inscribía el algodón transgénico Bt (MON531) de MONSANTO, en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales, con lo cual liberaba su utilización en el país.

- De modo a facilitar aún más la aprobación de nuevas semillas transgénicas, el 19 de septiembre de 2012 Franco rubricó el Decreto 9.699 mediante el cual reestructuró la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO). Entre otras cosas, se relativizaba la exigencia de la Evaluación de Impacto Ambiental para la habilitación de OGMs (semillas modificadas genéticamente), excluía a organizaciones de la sociedad civil en dicha Comisión, y autorizaba la liberación por la vía de la excepción de nuevas variedades, cuando existan riesgos para la seguridad alimentaria y la agricultura nacional.
- En noviembre de 2012, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria y MONSANTO firmaron un convenio de cooperación para insertar los eventos transgénicos BT y RR en las variedades de algodón del IPTA, 212 y 232. Los firmantes fueron el entonces presidente del IPTA Luis Llano Imas, y el representante de MONSANTO Fernando Giannoni. (Rojas, 2014: 36-37).

Por el lado de la agricultura empresarial, el objetivo es explícito: en los próximos cinco años, duplicar la superficie de cultivos mecanizados, es decir, pasar de las actuales 3 millones de hectáreas a 6 millones, en su mayor parte con cultivos transgénicos. Lo ha dicho explícitamente el líder de negocios internacionales de Monsanto, Jesús Madrazo: Paraguay tiene potencial para duplicar su actual superficie de cultivos (Rojas, 2014: 14).

Cuestiones pendientes

En primer lugar, pretendemos avanzar en el estudio de las consecuencias políticas, económicas y sociales del regreso de los partidos tradicionales al poder. Nos preguntamos qué consecuencias trajo este retorno en materia de derechos humanos. Respecto a eso, queremos enfocarnos en la modificación de la ley referente a la defensa nacional de Paraguay. ¿Cómo repercute en cuanto al acceso a los bienes del estado? ¿Sigue profundizándose la privatización del mismo? ¿Qué rol juegan los grandes grupos económicos y sus medios de comunicación en esta nueva etapa? ¿Qué tipo de ciudadanía se encuentra hoy en la sociedad paraguaya?

Por otro lado, el conjunto de grupos empresariales y mediáticos no se agota con el grupo Zucolillo y ABC Color. Nuestra intención es ampliar el espectro analizado e incluir a los grupos Vierci y Domínguez Dibb, y rastrear cual fue su posicionamiento durante los sucesos de junio de 2012.

A su vez, nos interesa averiguar qué otros actores jugaron un rol clave en la estrategia no violenta de desestabilización sobre el gobierno de Lugo. ¿Qué vinculación tienen con los hasta aquí investigados?

Bibliografía

- ARONSKIND, Ricardo (2012) “Paraguay o la ‘democracia’ que nos proponen” en Carbone, R. y Soler, L. (comp) *Franquismo en Paraguay*, Buenos Aires, El 8vo Loco Ediciones.
- CARBONE, Rocco (2012) “Franquismo (que no franqueza)” en Carbone, R. y Soler, L. (comp) *Franquismo en Paraguay*, Buenos Aires, El 8vo Loco Ediciones.
- GOOBAR, Walter (2012) “Manual de autoayuda para los golpes de estado suaves” en Miradas al Sur, n° 216. Disponible en <http://sur.infonews.com/notas/manual-de-autoayuda-para-los-golpes-de-estado-suaves> (consultado el 29/08/2014)
- HALPERN, Gerardo (2012) “ABC de un Golpe” en Carbone, R. y Soler, L. (comp) *Franquismo en Paraguay*, Buenos Aires, El 8vo Loco Ediciones.
- LUZZANI, Telma. (2012) “Territorios Vigilados. Como opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica.” Editorial DEBATE.
- MENDEZ GIRMALDI, Idilio (2012) “Monsanto golpea en Paraguay. Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo”. Disponible en <http://www.rebellion.org/docs/151721.pdf> (consultado el 10/10/2014)
- RODRIGUEZ, José Carlos (2012) “Los motivos del lobo. O el Golpe Parlamentario” en Carbone, R. y Soler, L. (comp) *Franquismo en Paraguay*, Buenos Aires, El 8vo Loco Ediciones.
- ROJAS VILLAGRA, Luis (2014) “La tierra en disputa. Extractivismo, exclusión y resistencia”, Asunción, BASE IS.
- ROITMAN ROSENMAN, Marcos (2013) “Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de estado en América Latina”, Ediciones AKAL S.A.
- SEGOVIA, Diego. (2010) “Comunicación y democracia. El rol de los medios en la construcción del discurso político ciudadano”, Asunción, BASE IS.
- SHARP, Gene (1988) “La lucha política no violenta. Criterios y métodos”, Santiago, Ediciones Chile América CESOC.
- SHARP, Gene. (2003) “De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación” Albert Einstein Institution.
- SOLER, Lorena (2012a) “Paraguay. La larga invención al golpe” Editorial Imago Mundi.
- SOLER, Lorena (2012b) “Lugo: el palacio y la plaza” en Carbone, R. y Soler, L. (comp) *Franquismo en Paraguay*, Buenos Aires, El 8vo Loco Ediciones.
- VIOR, Eduardo (2014) “La no-violencia sucia” en Miradas al Sur n° 301. Disponible en <http://sur.infonews.com/notas/la-no-violencia-sucia> (consultado el 29/08/2014)

Fuentes

Diario ABC Color (Asunción), ediciones varias.